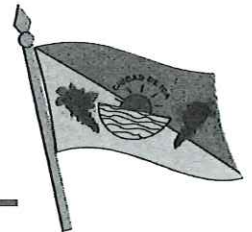




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



["Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho]

RESOLUCION DE ALCALDIA N° **266** -2024-AMPI

ICA, **07 MAY 2024**

VISTO: El Oficio N° 0626-2024-GTTSV-MPI, Informe Legal N° 3004-2024-AL/VOH-GTTSV-MPI, Resolución de Gerencia N° 1269-2024-GTTSV-MPI, Cedula de Notificación N° 005518 de fecha 01/04/2024, Informe Legal N° 1321-2024-AL/MDCM-GTTSV-MPI, Informe, Informe Final de Instrucción N° 0390-2024-AS-SGTT-GTTSV-MPI, Papeleta de Infracción N° 247656 de fecha 20-12-2023 (Documento en Original), Oficio N° 3463-2023-COMASGEN PNP/FP ICA-DIVOPUS-DUE-UTSEVI-OF-PIT, Certificado de Dosaje Etílico N° 018-1533, Oficio N° 3477-2023-COMASGEN PNP/FP ICA-DIVOPUS-DUE-UTSEVI-OF-PIT, Exp. Adm. N° 12031-2023-MP-GTTSV-MPI, de fecha 27/12/2023, Exp. Adm. N° 5490-2024-MP-GTTSV-MPI de fecha 09-04-2024, el Informe Legal N° 056-2024-HABH-GAJ-MPI y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 27680 de Reforma Constitucional, concordante con el Art. II de T.P. de la Ley N° 27972, establecen que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia, con sujeción a Ley.

Que, el administrado Arteaga Janampa Isaac, con el Expediente Administrativo N° 5490-2024-MP-GTTSV-MPI de fecha 09 de abril del 2024, el administrado al amparo del Art. 220° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS el que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, viene en interponer su recurso de Apelación contra la Resolución Gerencia N° 1269-2024-GTTSV-MPI de fecha 06/03/2024, y la nulidad de la papeleta de Infracción al tránsito, y que afecta el acto administrativo y violar los derechos fundaméntales y los principios del procedimiento administrativo, al colisionar las garantías y principios de tipicidad legalidad, razonabilidad del debido procedimiento, verdad y material;

Que, de fecha 20/12/2023, se le impone la papeleta de infracción N° 247656 al apelante con código de infracción M-01, MUY GRAVE por conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor en lo previsto en el Código Penal bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito;

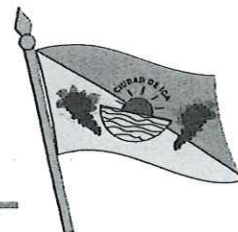
Que, el apelante con recurso administrativo de fecha 06/03/2024, indica que la autoridad competente no respondería lo descripto y manifestado dentro del descargo presentado a la PIT, N° 247656, habiéndose e incumplido el principio de legalidad, por tales consideraciones la sanción deviene nula de pleno derecho de conformidad al artículo 10° de la ley 27444;

Que, el administrado indica que en la dependencia policial de Parcona le impusieron la PIT, por el efectivo policial por una supuesta infracción al tránsito, y se requirió la nulidad a la PIT, a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, asimismo señala que se realizó el informe N° 1782-2023-MTC/18.01, de fecha 19 de diciembre del 2023, dentro de su contenido, en el acápite IV. Conclusiones; en el número 4.3, indica el personal PNP de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, no puede imponer PIT, ante el incumplimiento del Rtran; el administrado no adjunta prueba que el efectivo policial no pertenece a la Unidad de tránsito del Distrito de Parcona.

Que, el recurrente indica que la autoridad competente Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la MPI, no respondió a la causales de nulidad planteadas, de acuerdo a la ley N° 27444, previstos en el



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Capítulo IV, Procedimientos dentro del artículo 326.- requisitos de los formatos de las papeletas del conductor del numeral 1.7 y modalidad del servicio de transporte, tampoco dentro de la resolución impugnada.

Que, se ha efectuado el exegesis de la documentación que corre en el presente expediente, el Derecho de Defensa protege el estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo. Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pase a atribuirse la comisión de un acto u omisión antijurídica, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle, ser oído o formular sus descargos con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso.

Que, el recurso de apelación se ha presentado dentro del plazo legal; el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General, señala que uno de los principios del procedimiento administrativo, del debido procedimiento, por el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados, a expresar sus argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; a impugnar las decisiones que le afecten.

Que, con respecto al derecho de ofrecer pruebas y producir pruebas; esta garantía faculta a los administrados a presentar como medio de prueba que sean pertinentes para fundamentar sus argumentos, así como garantizar que la autoridad administrativa actúe y valore cada una de las pruebas admitidas antes de emitir una decisión en el procedimiento administrativo. Conviene señalar que la producción y valoración de pruebas está vinculada a la motivación de las decisiones y al resultado del procedimiento administrativo, dado que su consideración definiera el sentido de la decisión final. Al respecto, el Tribunal Constitucional refiere que este derecho resulta trascendental en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores. En tal sentido sostiene que todo administrado, para la defensa de sus derechos puede presentar pruebas de descargo, las cuales deben ser necesariamente valoradas por la Administración Pública para emitir una decisión final, es decir para concluir si corresponde o no la imposición de una sanción administrativa; tal como se indica en la Guía sobre la Aplicación del Principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2013-JUS/DNAJ Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Que, la Papeleta de Infracción al Tránsito es el documento donde se plasma los hechos constatados por la autoridad competente y que sirve de sustento para la instauración del correspondiente Procedimiento Sancionador en la cual encierra la veracidad de los hechos.

Que, en consideración de lo antes indicado debemos de señalar que el administrado no ha procedido a presentar prueba alguna que permita determinar que no se ha cometido la infracción y consecuentemente la papeleta de infracción al tránsito ha sido impuesta correctamente conforme lo establece el artículo 326° del decreto Supremo N° 016-2009-MTC, modificado por el artículo 1° del decreto Supremo N° 003-2014-MTC.

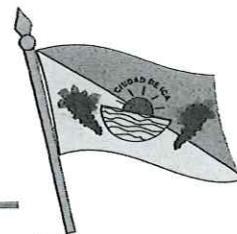
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181, que conforme a su artículo 1° establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre que rige en todo el territorio de la República establece, en su artículo 11°, que la competencia normativa, en materia de transporte y tránsito terrestre, le corresponde de manera exclusiva, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los gobiernos locales se limitan a emitir las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial, sin transgredir ni desnaturalizar la mencionada ley ni los reglamentos nacionales.

Que, el artículo 8° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus servicios complementarios — Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, establece: Medios probatorios. Son medios probatorios las Actas de Fiscalización; las Papeletas de infracción de Tránsito; los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos del MTC u organismos públicos, de los hechos en ellos recogidos, salvo prueba en contrario. Corresponde al administrado aportar los elementos probatorios que desvirtúen los hechos que se les imputan.

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la ley N° 27181 – Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que "Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre, en el tema de fiscalización: I) Supervisar detectar. Infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre".

Que, a lo establecido en el Art. 220° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando. Se trate de cuestiones de puro derecho, debiéndose dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que se eleve lo actuado al superior jerárquico.

Que, el Artículo 1° 1.1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de la ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, "son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de la norma de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación Concreta.

Que, todo administrado puede invocar el ejercicio del derecho de petición reconocida en el Art. 2° de la Constitución Política del Perú, y desarrollada en el Art. 118° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la entidad se ve obligada dar respuesta por escrito a lo solicitado.

Que, bajo la premisa fáctica y jurídica expuesta estando a los fundamentos y consideraciones precedentes, estando a las normas invocadas, los medios probatorios ofrecidos, y con las atribuciones conferidas en la ley N° 27972, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General y a las visaciones de estilo.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar Infundado el recurso de apelación interpuesto por Isaac Arteaga Janampa contra la Resolución de Gerencia N° 1269-2024-GTTSV-MPI de fecha 06/03/2024, consecuentemente firme en todos sus extremos la impugnada, a mérito de las consideraciones expuestas en el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad al Art. 50° de la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y el Art. 228° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único de la ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, se declare por Agotada la Vía Administrativa.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Secretario General de la Municipalidad Provincial de Ica, notificar la presente resolución con las formalidades de Ley; asimismo remita la papeleta de Infracción al tránsito N° 247656 (original) a la GTTSV, con la finalidad de que continúe la sanción correspondiente de acuerdo a Ley.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Ing. Carlos Humberto Reyes Roqui
ALCALDE